

Las instituciones no funcionan

Ya se ha hecho habitual en Chile, particularmente entre los políticos, afirmar que hay que dejar que las instituciones funcionen. Sin embargo, los hechos muestran que la "institucionalidad" es cada vez más inoperante. Basta revisar someramente los acontecimientos acaecidos las últimas semanas, para constatar esta preocupante situación.

El caso "Dominga" resulta paradigmático. Ante un contundente fallo adverso en los tribunales de justicia, se reúne el comité de "subrogantes" de ministros, estos últimos todos obligados a abstenerse por haber emitido juicios negativos frente el proyecto minero con antelación al fallo en materia medioambiental. Pues bien, el nuevo comité *ad hoc* vuelve a decidir, por unanimidad, en contra de Dominga en un dictamen que lejos de ser fundamentado en aspectos técnicos se encuentra asentado en posiciones ideológicas. En suma, 10 años con el proyecto parado. Todo esto, en el contexto de la necesidad de cristalizar nuevas inversiones que permitan reimpulsar el alicaído crecimiento económico de la nación.

Los resultados de la prueba PAES muestran el descalabro que ha sido para la educación escolar chilena la reforma efectuada durante el segundo gobierno de Bachelet. Diez años después, los liceos públicos, incluso los denominados "emblemáticos", se han deteriorado al punto que sus egresados tienen escasísimas oportunidades de entrar a estudiar una carrera exigente en una universidad de prestigio. Las brechas, que se pretendía acortar, han sido agigantadas.

En los tribunales de justicia o las policías se "pierden las pruebas" de causas de connotación pública con una facilidad asombrosa, pasó en la causa contra Jadue, el exalcalde de Recoleta, ahora en la que se lleva contra Monsalve, el exsubsecretario del Interior. Y no ocurre nada.

En los hospitales públicos, a pesar de reiteradas promesas, las listas de espera para operaciones se alargan en vez de acortarse. Se podría seguir extensamente la enumeración, incluyendo al sistema político.

¿Cuáles son las causas de tanta ineficacia? Como las instituciones están compuestas por personas, en ellas ha de encontrarse parte importante de la respuesta, especialmente entre líderes políticos y sociales que por años han venido abjurando de sus auténticas responsabilidades; para muchos el poder y la influencia parecen pesar más que el servicio. La excesiva ideologización en los debates públicos y el enquistamiento de la corrupción en las diferentes esferas del acontecer nacional, sobresalen también dentro de las explicaciones. Faltan capacidades y voluntad de bien.

Chile necesita un cambio de aires: de liderazgos, ideas, propuestas e iniciativa creadora; y, por supuesto, realizar algunas reformas propiamente institucionales, como la del Estado. No más de lo mismo y los mismos.

Opinión

Edición papel digital

La PAES y la mediocridad del 2%

Juan José Obach
Director ejecutivo de Horizontal



La semana pasada ocurrieron dos hechos que a simple vista no guardan relación. El lunes se dieron a conocer los resultados de la PAES 2025, evidenciando, una vez más, las profundas brechas de nuestro sistema educativo. El miércoles, en un seminario, cuatro economistas de distintas sensibilidades políticas expresaron: “Llevamos 10 años estancados creciendo al 2%... el problema es estructural”. Lo cierto es que con el profundo deterioro de la educación pública, olvidémonos de enmendar el rumbo y volver a crecer.

Un solo establecimiento público dentro de los 100 mejores en la PAES 2025 solo confirma la tendencia de los últimos años: la educación pública se cae a pedazos. Los liceos emblemáticos, otrora símbolos de movilidad social, sucumbieron a la violencia de los overoles blancos y a la liviandad de quienes demonizaron la palabra “mérito” y se la jugaron por un “efecto par” que jamás llegó. Hoy el Instituto Nacional, que solía ser el mejor de ellos, aparece apenas en el lugar 303.

Si el país no recupera sus escuelas públicas, las brechas seguirán aumentando, el crecimiento económico se seguirá postergando y la rabia, acumulando. Hoy, uno de cada cuatro trabajadores no entiende lo que lee (PIAAC, 2023), lo que coarta cualquier esfuerzo por retomar la senda del desarrollo. No es paradójico, entonces, que para explotar nuestros propios recursos tengamos que depender de expertos extranjeros. Pasó históricamente con el cobre y pasa hoy en el sector de generación de energía, con ingenieros europeos, y no chilenos, liderando los proyectos.

El desplome de la educación pública hace aún más infranqueable a nuestras élites. Por ejemplo, si el 2013, cuatro liceos emblemáticos –IN, INBA, Carmela Carvajal y Javiera Carrera– lograban situar 863 estudiantes en el 5% de mejor rendimiento, el 2025 ese número cayó a 201. Curioso que esta tendencia nunca movilizó al actual gobierno, que llegó al poder con un discurso político cargado de dardos hacia la homogenea composición de dichas élites. Por el contrario, su agenda se ha centrado en condonar deudas universitarias y docentes, dejando en el olvido a la educación escolar. Así lo demuestra un reciente informe de Contraloría que cuestiona duramente el presupuesto del “Plan de Reactivación Educativa”.

Ya sea a través del aumento de la productividad laboral, la innovación o la difusión del conocimiento, la evidencia del efecto de la educación en el crecimiento es abrumadora. Por ejemplo, si lográramos cerrar la brecha de rendimiento académico con la OCDE, nuestra tasa de crecimiento de largo plazo aumentaría en un 50% (Horizontal, 2023).

La lección es clara: si queremos crecer al 5%, necesitamos una fuerza laboral preparada y una educación pública que de verdad “empareje la cancha” y genere movilidad social. Así, cualquier esfuerzo por delinear un pacto de desarrollo, debe partir por recuperar nuestra educación pública. De lo contrario, nos quedaremos estancados en la mediocridad del 2%.

Las instituciones no funcionan

Álvaro Pezoa
Director Centro de Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de Los Andes



Ya se ha hecho habitual en Chile, particularmente entre los políticos, afirmar que hay que dejar que las instituciones funcionen. Sin embargo, los hechos muestran que la “institucionalidad” es cada vez más inoperante. Basta revisar someramente los acontecimientos acaecidos las últimas semanas, para constatar esta preocupante situación.

El caso “Dominga” resulta paradigmático. Ante un contundente fallo adverso en los tribunales de justicia, se reúne el comité de “subrogantes” de ministros, estos últimos todos obligados a abstenerse por haber emitido juicios negativos frente al proyecto minero con antelación al fallo en materia medioambiental. Pues bien, el nuevo comité *ad hoc* vuelve a decidir, por unanimidad, en contra de Dominga en un dictamen que lejos de ser fundamentado en aspectos técnicos se encuentra asentado en posiciones ideológicas. En suma, 10 años con el proyecto parado. Todo esto, en el contexto de la necesidad de cristalizar nuevas inversiones que permitan reimpulsar el alicaído crecimiento económico de la nación.

Los resultados de la prueba PAES muestran el descalabro que ha sido para la educación escolar chilena la reforma efectuada durante el segundo gobierno de Bachelet. Diez años después, los liceos públicos, incluso los denominados “emblemáticos”, se han deteriorado al punto que sus egresados tienen escasísimas oportunidades de entrar a estudiar una carrera exigente en una universidad de prestigio. Las brechas, que se pretendía acortar, han sido agigantadas.

En los tribunales de justicia o las policías se “pierden las pruebas” de causas de connotación pública con una facilidad asombrosa, pasó en la causa contra Jadue, el exalcalde de Recoleta, ahora en la que se lleva contra Monsalve, el exsubsecretario del Interior. Y no ocurre nada.

En los hospitales públicos, a pesar de reiteradas promesas, las listas de espera para operaciones se alargan en vez de acortarse. Se podría seguir extensamente la enumeración, incluyendo al sistema político.

¿Cuáles son las causas de tanta ineficacia? Como las instituciones están compuestas por personas, en ellas ha de encontrarse parte importante de la respuesta, especialmente entre líderes políticos y sociales que por años han venido abjurando de sus auténticas responsabilidades; para muchos el poder y la influencia parecen pesar más que el servicio. La excesiva ideologización en los debates públicos y el enquistamiento de la corrupción en las diferentes esferas del acontecer nacional, sobresalen también dentro de las explicaciones. Faltan capacidades y voluntad de bien.

Chile necesita un cambio de aires: de liderazgos, ideas, propuestas e iniciativa creadora; y, por supuesto, realizar algunas reformas propiamente institucionales, como la del Estado. No más de lo mismo y los mismos.

LT latercera.com

Declaración de intereses en
www.grupocopesa.cl/declaracion
Impreso en Santiago por Copesa S.A.

Atención a suscriptores
en sucursal virtual:
http://sucursalvirtual.latercera.com



SANTIAGO DE CHILE |
AÑO 72

SU OPINIÓN IMPORTA

Envíe sus objeciones al contenido o cobertura del diario a
lector@latercera.com

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1400 caracteres con espacios a:

Email: correo@la.tercera.com
Avenida Apoquindo 4660, Santiago.
La Tercera se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos conforme a sus estándares editoriales, en particular respecto a la exigencia de un lenguaje respetuoso y sin descalificaciones. Las cartas recibidas no serán devueltas.

ESPACIO ABIERTO

Ya no es tiempo para errores

Javier Sajuria
Profesor de
Ciencia Política
Queen Mary
University



No es extraño que los gobiernos cometan errores. Incluso, es bastante común que cometan más errores cuando tienen menos experiencia en el poder, o al final de largos periodos en los que se nota el agotamiento. Pero el nivel de fallas y decisiones desafortunadas que se han cometido en los últimos meses escapan a cualquier justificación de amateurismo o inexperiencia. Hemos llegado a un punto donde es más razonable asumir que hay una serie de decisiones claves donde se ha actuado con abierta imprudencia, o incluso, negligencia.

La reciente crisis generada por la compra de

la vivienda del expresidente Allende podría haber sido un error excepcional, si es que el gobierno no terminara de salir de un problema autogenerado para entrar en otro. En este caso, incluso, se trata de actores políticos pertenecientes al PS, un partido con décadas de experiencia en el Estado y que, por lo tanto, uno esperaría un poco más de competencia en su actuar. El contrato de compraventa firmado por un abogado en representación de la senadora Allende y la ministra Fernández es una abierta contravención a la Constitución, y es molesto presenciar el nivel de piruetas jurídicas o de falsa indignación que hace el entorno de las afectadas para evitar cumplir con el mandato constitucional. En el caso de la ministra, bastaría con que ella o el gobierno asumieran el error. Para la senadora, ya que no existe la renuncia al puesto en el Senado, sólo le queda esperar la decisión del Tribunal Constitucional. Pero más allá del procedimiento a seguir, este es un error absurdo, desprolijo y dañino. La obstinación en no asumir responsabilidades le agrega un componente de arrogancia a todo el show.

Pero esto viene a reglón seguido de una serie de errores cometidos por el mismo Presidente en el caso Monsalve, en el que tanto él como sus colaboradores más cercanos actuaron con escasez de tino y sentido de urgencia a la hora de enfrentar las acusaciones contra el

exsubsecretario. El gobierno no es responsable de los delitos que habría cometido Monsalve, pero sí de las decisiones que le permitieron seguir en su cargo durante dos días antes de que explotara la noticia. Lo mismo con la desafortunada conferencia de prensa en la que el Presidente creyó tener más habilidades mediáticas que las que demostró. Si esto ocurre al inicio de un mandato, podemos excusarlo como un bache de instalación. A estas alturas, queda la sensación de que esos aprendizajes ya no ocurrieron.

No es irónico recordar los slogans de los períodos presidenciales de Piñera: “el gobierno de los mejores” o el de “los tiempos mejores”, ambos manchados por los errores políticos cometidos por sus altas autoridades. Las protestas sociales que le siguieron en ambos períodos sirven como corolario a esa actitud. Lo irónico es percatarse que esa dinámica de arrogancia y desprolijidad se observa en quienes prometieron estar en un estadio superior de gestión y ética pública. Deja de ser irónico y pasa a ser violento cuando lo hace un gobierno con el que uno concuerda ideológicamente. Y pasa de violento a peligroso cuando la confianza en las instituciones pasa por su peor momento y vemos cómo las fuerzas contrarias a la democracia liberal se aprovechan de esa coyuntura para promover el autoritarismo como una vía de solución.